

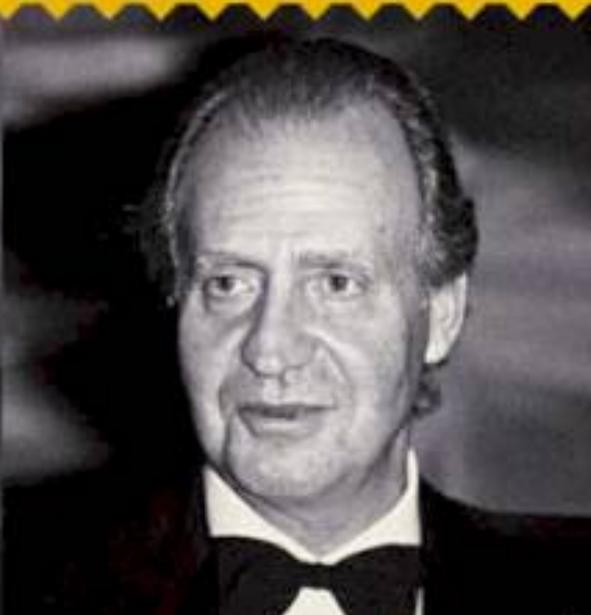


Juan Francisco Fuentes

CON EL REY Y CONTRA EL REY

LOS SOCIALISTAS Y LA MONARQUÍA

De la Restauración canovista a la abdicación de Juan Carlos I
(1870-2014)



Juan Francisco Fuentes

Con el rey y contra el rey

Los socialistas y la monarquía:
de la Restauración canovista
a la abdicación de Juan Carlos I
(1879-2014)

*A la memoria de
Antonio Morales Moya.*

«Los socialistas no somos, no seremos nunca, *NUNCA*, *NUNCA*, monárquicos».

EL SOCIALISTA, 4 de junio de 1913

«Hace años, en un mitin celebrado en el cine Pardiñas, decía yo que si me preguntasen qué quería, mi respuesta sería esta: “¡República!, ¡república!, ¡república!”. Si hoy me hicieran la misma pregunta contestaría: “¡Libertad!, ¡libertad!, ¡libertad!”.

Luego que le ponga cada cual el nombre que quiera».

FRANCISCO LARGO CABALLERO, *Mis recuerdos* (1946)

«Tengo la firme convicción de que, después de la Transición, la monarquía y la democracia están indisolublemente unidas y de que el daño a la monarquía es un daño irreparable a la democracia».

GREGORIO PECES-BARBA, *La democracia en España* (1996)

CAPÍTULO I. REPUBLICANOS, «MA NON TROPPO»

La larga noche de la monarquía canovista

El nacimiento de Alfonso XIII, hijo póstumo de Alfonso XII, el 17 de mayo de 1886, no apareció ni siquiera mencionado en *El Socialista*, órgano oficial del PSOE, el partido obrero fundado en la clandestinidad siete años antes, al principio de la Restauración canovista. La mayoría de edad del rey en mayo de 1902, que supuso el comienzo de su reinado efectivo, solo mereció algún comentario sarcástico por el dinero gastado en tan «fausto acontecimiento», mientras los obreros perdían un día de salario por haberse declarado jornada festiva.[1] Cuatro años después, la proximidad de su boda con la princesa Victoria Eugenia de Battenberg sería motivo de acerbos críticas debido al derroche de millones dilapidados en los festejos. La mayoría de la nación, por el contrario, ajena al «fausto acontecimiento» —de nuevo la expresión, utilizada con amarga ironía—, seguía trabajando y sufriendo. No, no había ningún motivo para compartir la alegría oficial, sino todo lo contrario, razones de sobra para sentir «coraje, odio, ansias de hacer un ejemplar escarmiento».[2]

El «escarmiento» se produjo con el siguiente número de *El Socialista* recién salido de la imprenta. El 31 de mayo de 1902, cuando el cortejo nupcial regresaba a palacio por la calle Mayor, el anarquista Mateo Morral lanzó una bomba que le costó la vida a una docena de personas, causó numerosos heridos y dejó ilesos a los recién casados. El suceso fue condenado sin reservas por el periódico, como había hecho ya en su día con el asesinato de Cánovas del Castillo, aunque manifestando su respeto a las ideas anarquistas

y a quienes las profesaran y condenando la saña de las gentes de orden, que clamaban venganza. Los socialistas no compartían ni las ideas ni los métodos violentos de quienes predicaban la acracia, pero tampoco creían en la pena de muerte como remedio para frenar la propaganda enloquecida de los dinamiteros.^[3] Así pues, a la hora de la verdad, lo del «ejemplar escarmiento» que pedía el periódico obrero en su número anterior quedaba en una forma algo imprudente de desahogar su ira en un momento de exaltación. Ni atentados ni pena de muerte: los socialistas venían a instaurar la justicia social que acabaría con la explotación del hombre por el hombre y pondría fin a la barbarie de los opresores y de los oprimidos.

Si de los anarquistas les alejaba su fe en la fuerza redentora de la sangre, de los republicanos les separaba casi todo. La república tal como la concebían sus partidarios, como un fin en sí mismo, podía no solo ser insuficiente en la magna transformación social que se proponía el PSOE, sino incluso contraproducente, al desviar los afanes y la lucha de las masas hacia la simple sustitución de unas instituciones burguesas por otras. Ni siquiera era evidente que en una sociedad burguesa la clase trabajadora viviera mejor bajo un régimen republicano. A los socialistas se les ocurrían multitud de ejemplos para demostrar lo contrario. La república francesa, modelo intachable para los republicanos españoles, era el régimen que había masacrado a los combatientes de la Comuna en 1871. Quince años después, al reflexionar *El Socialista* sobre la cuestión de las formas de gobierno, la Tercera República mantenía unas condiciones laborales oprobiosas, con jornadas de doce horas, dos más que en la monárquica Inglaterra. Lo mismo cabría decir de algunos derechos fundamentales, como el de celebrar *meetings* al aire libre, tan frecuentes en el Reino Unido e ilegales todavía en Francia. Republicano federal era el régi-

men que hasta 1864 había consentido la esclavitud en Estados Unidos y el sistema vigente en Suiza, donde huelgas y manifestaciones obreras eran disueltas por la policía y sancionadas por los tribunales, mientras la justicia británica absolvía a los dirigentes socialistas detenidos en los últimos disturbios. Países con poder hereditario —monarquía o imperio—, como Bélgica, Alemania y el Reino Unido, disfrutaban de derechos y libertades inexistentes en algunas repúblicas que blasonaban de democráticas. Se equivocaban, pues, los republicanos españoles al fiarlo todo a un simple cambio en la forma de gobierno. Monárquica o republicana, la burguesía utilizaba formas distintas de disfrazar su dominio de clase, que al final era lo único importante, y nada en la historia comparada del mundo moderno indicaba que un estado burgués fuera menos opresivo cuando se quitaba la corona.[4]

Pese a ello, *El Socialista* había declarado en sus bases fundacionales, aprobadas en enero de 1886, que ante el dilema república o monarquía optaría «sin vacilar por la primera».[5] Hubo, sin embargo, una seria discrepancia entre dos de los fundadores del PSOE, el doctor Jaime Vera y Pablo Iglesias, sobre qué fuerzas burguesas debían ser combatidas con mayor énfasis, pues mientras el primero entendía que los partidos reaccionarios constituían su enemigo natural, el tipógrafo ferrolano consideraba que el mayor peligro para la causa del socialismo procedía de los más «avanzados», es decir, de los republicanos.[6] Finalmente, se impuso este último criterio, y de ahí la permanente polémica que el periódico mantendrá con las organizaciones republicanas, con su prensa y con algunos de sus líderes, como Alejandro Lerroux. En sus críticas al republicanismo influyeron poderosamente la mala experiencia de la Primera República, que acabó disolviendo la Primera Internacional; el oportunismo de sus dirigentes —«cuatro burgueses ahí-

tos», que difícilmente podían liberar a una «muchedumbre hambrienta»—[7] y el contraste entre el puritanismo extremo de los padres fundadores del socialismo español y la moral más bien laxa de algunos políticos republicanos. Al final, por mucho que la prefirieran como forma de Estado, la república no pasaba de ser, en palabras de un colaborador de *El Socialista*, una versión moderna del opio del pueblo.[8]

Luchar por la emancipación de la clase trabajadora requería, pues, hacer una política completamente distinta de la que hacían los «partidos burgueses». Así lo había declarado ya la comisión organizadora de la reunión en la que nació, el 2 de mayo de 1879, el Partido Socialista Obrero Español, y por tanto se puede decir que la oposición a la política burguesa en sus diversas manifestaciones formó parte de sus señas de identidad desde el principio de su existencia. La reunión se celebró en una fonda madrileña llamada Casa Labra, próxima a la Puerta del Sol, y de ella surgió el núcleo fundador del partido obrero, integrado por veinticinco personas y decidido a propagar sus ideas emancipadoras plasmándolas en un manifiesto-programa que vio la luz dos meses después. Eran en su mayoría tipógrafos de la capital con un conocimiento muy rudimentario del marxismo, su principal, por no decir única, fuente de inspiración. Entre ellos destacaba Pablo Iglesias Posse, un joven próximo ya a la treintena, de infancia muy difícil y formación autodidacta, que le permitió no obstante desempeñarse muy dignamente como ideólogo y dirigente del PSOE hasta su muerte en 1925, tras una larga vida de abnegación y sacrificio que sirvió de ejemplo a sus cada vez más numerosos seguidores, aquellos que en sus últimos años le conocerían como *el Abuelo*.

El régimen de la Restauración, implantado tras el regreso de Alfonso XII a España en 1874, no era el entorno más

propicio para el desarrollo de un partido que aspirara a la abolición del sistema capitalista. El carácter profundamente conservador de la monarquía parlamentaria diseñada por Cánovas apenas dejaba margen para la lucha legal contra el sistema. Pero había una cuestión previa, de suma importancia, ajena a las estrecheces del marco político, y era la debilidad de aquello mismo que el nuevo partido pretendía eliminar: un capitalismo industrial que en la mayor parte del país brillaba por su ausencia. Cómo destruir lo que apenas existía será un problema de primer orden que condicionará durante décadas la visión histórica y la estrategia política del socialismo español, que deberá elegir entre avanzar poco a poco en solitario, preservando celosamente los modestos logros obtenidos, o quemar etapas a mayor velocidad estableciendo alianzas ocasionales con otras fuerzas. La lucha contra la monarquía, símbolo de un poder oprobioso y anacrónico, podía obrar el prodigio de que socialistas y republicanos dejaran a un lado sus diferencias para coadyuvar al triunfo de la república. Esta segunda opción entrañaba, sin embargo, el riesgo de ser derrotados por enemigos muy poderosos —la corona, la oligarquía, el Ejército— y perder el terreno ganado hasta entonces, y todo por una causa que ni siquiera era la del socialismo. Si los republicanos querían tanto su república, que la trajeran ellos. Tal será la posición que prevalezca entre los socialistas, pero no sin altibajos y fuertes disputas internas entre el sector más obrerista y ortodoxo, que verá en la república el régimen burgués por excelencia, y los partidarios de un socialismo reformista proclive a pactos con los republicanos.

La progresiva liberalización de la monarquía canovista obligó a los socialistas a moverse en una realidad más compleja y en cierta forma más incómoda, porque ponía en entredicho el ingenuo esquematismo de su manifiesto-programa de 1879. Las reformas liberales de la década si-

guiente ampliaron notablemente el juego político y establecieron derechos y libertades similares, al menos sobre el papel, a los de los países más avanzados de Europa. Aquel impulso democratizador les permitió salir de la clandestinidad, disfrutar de una razonable libertad de prensa, tan importante para la propagación de sus ideas, y crear su sindicato hermano, la Unión General de Trabajadores, fundado en Barcelona en 1888, en plena Exposición Universal. En aquellos años se registró incluso una tímida aproximación entre el Gobierno de Su Majestad y el PSOE cuando el doctor Jaime Vera presentó, en nombre de su partido, un detallado informe sobre la situación de la clase trabajadora a la Comisión de Reformas Sociales creada en 1883 por el ministro de la Gobernación, Segismundo Moret. Eran tiempos en los que la Europa liberal giraba hacia políticas reguladoras del mundo del trabajo ante la gravedad de la cuestión social. España no iba a ser una excepción, aunque los avances en este terreno, como en tantos otros, fueron de una lentitud exasperante.

La década de los noventa empezó bien, con la ley del sufragio universal masculino, y acabó mal, con el Desastre del 98. Las guerras coloniales parecieron echar por tierra los progresos de los últimos años, empañados por la impopularidad de aquellas campañas y por la humillación final de la derrota. «O todos o ninguno» fue el lema, nada revolucionario, utilizado por el PSOE en su propaganda contra un sistema de reclutamiento que libraba del servicio militar a los hijos de los ricos y condenaba a los más desfavorecidos a morir en guerras lejanas y ajenas. Si la clase gobernante creía de verdad que estaban en juego los intereses nacionales, debía dar ejemplo enviando a sus hijos a ultramar, en vez de dejarlos en sus casas a buen recaudo. No lo decían solo los socialistas. Un regeneracionista de pro, Joaquín Costa, lo denunció en su célebre ensayo *Oligarquía y*

caciquismo (1901): «La clase llamada gobernante había echado la llave a las Cortes el día en que iba a discutirse el servicio militar obligatorio y se había guardado los hijos en casa, sin mandar a la guerra ni una mala compañía (...) por amor a lo que, profanándola, denominaba patria».[9] Pablo Iglesias no lo hubiera dicho mejor.

En el diagnóstico del llamado «problema de España», los dirigentes del PSOE no andaban muy lejos de los postulados regeneracionistas sobre la anomalía del caso español, derivada de la baja calidad de nuestra burguesía, según ellos, la más atrasada de Europa y, como tal, incapacitada para ejercer de clase directora. Que manejaran indistintamente los dos conceptos —burguesía y clase directora— demuestra hasta qué punto su discurso se movía entre un marxismo muy primario y un regeneracionismo al uso, nada marxista, pero que les servía para explicar esa supuesta especificidad nacional que tanto dificultaba la labor del socialismo. Al final resultaba que los males de la sociedad española no se debían a la pujanza de la burguesía, sino todo lo contrario, a su apatía y debilidad como clase dominante; no a los excesos del sistema capitalista, sino a la falta de un auténtico capitalismo capaz de poner a España a la altura de los tiempos y a la clase obrera en disposición de acometer su propio proyecto. Por eso, afirmaba el órgano del PSOE en pleno desastre colonial, como la burguesía española transitaba por la historia «a paso de carreta», se daba la circunstancia insólita de que los socialistas tenían en ocasiones que empujarla a cumplir su misión histórica —industrializar, liberalizar, secularizar—, porque mientras no se produjera una auténtica revolución burguesa no tenía sentido plantearse objetivos más ambiciosos, que serían siempre saltos en el vacío.[10]

¿Monarquía o república? Si a los socialistas les daban a elegir, preferían —claro está— la segunda, pero sin hacer

de ello cuestión de principio, porque la causa del socialismo era demasiado grandiosa como para detenerse en una simple forma de gobierno. Solo los políticos burgueses podían sentirse atraídos por una polémica en el fondo bastante bizantina, reducida al típico «quítate tú que me pongo yo». Los políticos burgueses y unos pocos socialistas de origen mesocrático, como el doctor Vera, que abandonó el partido a finales de los ochenta harto del antirrepublicanismo de sus compañeros. Si a los republicanos les llegaron a tachar de «maestros consumados en el arte de engañar», a sus partidos los tenían por meras «fuerzas negativas en la política española».[11] En cuanto a la monarquía, los socialistas se movían entre el desdén y la indiferencia, tal vez por la menor visibilidad de la corona desde la muerte de Alfonso XII en 1885 hasta la mayoría de edad de Alfonso XIII en 1902, un prolongado lapso de tiempo en el que estuvo encarnada por un hijo póstumo y una dama extranjera, la reina María Cristina de Habsburgo, de sobrios modales y vida recatada. No: la clase obrera no podía rebajarse a medir sus fuerzas con un menor de edad y una pobre viuda. La lucha de clases era otra cosa. No es de extrañar que los republicanos acusaran con frecuencia a los socialistas de ser cómplices de la monarquía y que ellos tuvieran que defenderse abominando públicamente de ella con grandes aspavientos. «Somos republicanos; quede así sentado, y que nadie lo olvide», afirmaron en una de sus innumerables polémicas con los apóstoles de la república.[12]

Todo empezó a cambiar tras el Desastre del 98 y el comienzo del reinado de Alfonso XIII cuatro años después. Poco a poco, el socialismo español fue saliendo de su indiferentismo político para inclinarse por una mayor presencia en las instituciones. El punto de partida resultaba casi irrisorio: en 1901, el PSOE tenía veintisiete concejales en toda España. En sus veintidós años de historia no había conse-

guido ni un solo escaño en el Parlamento y en las últimas elecciones antes del Desastre, celebradas en marzo de 1898, obtuvo apenas 20.000 votos,^[13] tres veces más que su militancia de la época, concentrada principalmente en Asturias, Vizcaya y Madrid, una cifra muy modesta en todo caso para una organización que aspiraba a convertirse en partido de masas y a tener representación parlamentaria. Estaba claro que por sus propios medios no podría alcanzar este último objetivo y que debía plantearse formar coalición electoral con fuerzas afines.

Pese a su antagonismo histórico, republicanos y socialistas parecían condenados a entenderse, aunque primero hubiera que vencer los escrúpulos de Pablo Iglesias, siempre celoso de la integridad de los valores del socialismo, que justificaban por sí solos las «victorias morales», es decir, las clamorosas derrotas en las urnas, cosechadas una y otra vez por el partido obrero. La desaparición en estos primeros años del siglo de algunos de los políticos que habían marcado la reciente historia de España —Sagasta, Castelar, Pi y Margall, antes Cánovas del Castillo— imponía un realineamiento de las fuerzas políticas que facilitaba pactos hasta entonces impensables. Los usos autoritarios del gobierno presidido por Maura desde 1907 ayudaban también a buscar acuerdos en el amplio espectro de las izquierdas. ¿No había declarado el PSOE seis años antes que solo aceptaría ir en coalición con los republicanos cuando hubiera «un gobierno tan insensato que pretendiera arrebatarnos uno o más derechos políticos»?^[14] Pues con el nombramiento de Maura y algunas de sus reformas, como la ley antiterrorista de 1908, se cumplía ya esa condición.

Los avances hacia la unidad tuvieron que sortear las reticencias de siempre. Recién constituido el gobierno de Maura, Pablo Iglesias reconocía en una reunión del partido sus preferencias por los políticos conservadores, porque so-

lían tener más carácter y más sentido de la realidad que los liberales; por eso, casi toda la legislación obrera había sido aprobada bajo gobiernos de este signo. En cuanto a los republicanos, las relaciones con ellos habían mejorado algo, pero seguían sin ser buenas, «ni mucho menos».[15] Si en septiembre de 1908 el VIII Congreso dejó abierta la posibilidad de coaligarse con «partidos burgueses avanzados», unos meses después el propio Iglesias recordaba a sus compañeros que los republicanos, «como los monárquicos, piensan más en los puestos que en las ideas».[16]

Pero la deriva del régimen hacia el militarismo y el autoritarismo no admitía excusas ni demoras. La reactivación de la guerra de África y los reveses sufridos por el Ejército en la zona de Melilla llevaron a las autoridades a decretar una amplia movilización de reservistas, que provocó una huelga general en Barcelona de graves consecuencias políticas. La izquierda lanzó de nuevo el grito de «¡o todos o ninguno!» popularizado por los socialistas en 1898, y el gobierno ordenó la detención de los sospechosos habituales, entre ellos Pablo Iglesias. Los disturbios de la llamada Semana Trágica de julio de 1909 se saldaron con decenas de muertos, una ola de violencia anticlerical sin precedentes y una represión implacable, que se acabó cobrando la vida del pedagogo anarquista Francisco Ferrer y Guardia, ajusticiado en el castillo de Montjuïc el 13 de octubre. Para entonces, el grito de «¡Maura, no!» se había convertido en un clamor dentro y fuera de España. Temiendo que la impopularidad del gobierno afectara a la corona, Alfonso XIII forzó el cese de su primer ministro y dio paso a un gabinete liberal presidido por Moret. Fue una decisión trascendental, que supuso la ruptura del «turno pacífico» y sentó un grave precedente en el funcionamiento de la monarquía canovista. Maura nunca le perdonó al rey la forma en que le echó del poder. Tampoco cierta derecha recalcitrante, que desde en-

tonces, en sucesivas generaciones de políticos y periodistas, ha recelado de una dinastía supuestamente obsesionada con ganarse la indulgencia de la izquierda.

Si Alfonso XIII pensó que deshaciéndose de Maura las aguas volverían a su cauce se equivocó por completo. El 7 de noviembre de 1909, unos días después de la caída del gobierno, Pablo Iglesias participaba junto a las principales figuras del republicanismo en un mitin que daba estado oficial a la unión entre socialistas y republicanos, a expensas solo de formalizar el pacto electoral. «Instaurad la república, aunque sea conservadora», exclamó Iglesias, dirigiéndose a sus compañeros de coalición: «Barred la monarquía». De no conseguirlo juntos, serían «indignos de llevar el título de hombres». «La democracia en marcha», tituló *El Socialista* al informar en portada y a toda página del mitin del 7 de noviembre.^[17] Dos meses después, Iglesias se descolgaba con un artículo contra Maura apelando incluso al atentado personal si trataba de recuperar el poder. Impedir el regreso del tirano lo justificaba «todo, todo»: la protesta ruidosa, la huelga general, la revolución, el atentado...^[18] También una alianza que durante largo tiempo pareció imposible.

Nacida «virtualmente» en el mitin del 7 de noviembre,^[19] la conjunción republicano-socialista se presentó a las elecciones legislativas de mayo con el propósito, leemos en el órgano del PSOE, de reivindicar «nuestro honor de nación civilizada» y sacar al país «de la charca inmundada en que estamos metidos».^[20] La conjunción consiguió llevar a las nuevas Cortes veintisiete diputados, un balance estimable en un régimen como aquel, en el que los partidos ajenos al «turno» competían por un puñado de escaños. Los 41.000 votos obtenidos en Madrid —10.000 más que la candidatura monárquica— convirtieron a Pablo Iglesias en el primer diputado socialista en el Parlamento español, hito